

Para discutir el proyecto económico nacional (I)

Raúl González Fabre

- *La cuestión histórica de Venezuela en este momento es cómo pasar de una estructura económica rentista a una productiva.*
- *Nuestra crítica consiste en constatar que disminuimos en productividad y solidaridad, por razón de nuestras mismas acciones.*
- *El acento ha de ponerse en los aspectos organizacionales de la empresa y la sociedad.*
- *La solidaridad es un valor producto y productor de orden.*
- *El Estado debe asegurar las oportunidades mínimas a todos para una participación exitosa como productores en los mercados, de la que puedan derivar su participación como consumidores.*

Esta es la primera entrega de un artículo de dos, acerca de las bases para la discusión de un proyecto económico nacional. Pretende situar nuestra cuestión económica en el marco político y cultural que explica el desorden económico nacional. Propone el crecimiento de un orden productivo y solidario como objetivo de la transformación estructural de la economía. En la siguiente entrega se atenderá a las bases prácticas de la discusión.

REIVINDICANDO SE NOS PASA LA VIDA

El 6 de septiembre, por poner un día, concurrieron ante el Congreso Nacional delegaciones más o menos nutridas de los empleados de Aeropostal, los investigadores del FONAIAP, el Estado Sucre, Venezolana de Televisión, el CONAC, la población de Carora, los portuarios, los pensionados del IVSS y los cineastas. Tan repentina vigencia del poder legislativo, capaz ahora de reunir en torno a sí a los sectores más variados de la nación, da pie a una sospecha que pronto se resuelve: todos iban a buscar dinero del presupuesto estatal, bajo una modalidad u otra, con mejores o peores razones para solicitarlo, según el caso y según el modelo de Estado en que se piense.

Claro que todos pensaban en un solo modelo de Estado, el mismo que tiene en mente la población —y sus locutores radiales— cuando apoya de manera difusa estas reivindicaciones: un Estado que reparte renta petrolera. Por lo mismo, los peticionarios no apoyaban el reclamo en su alta productividad o contribución pasadas al producto nacional, sino en el mejor de los casos, en su alta productivi-

dad y contribución futuras. Esto cuando no en la palabra del gobierno, en la importancia del interés que representan, en derechos adquiridos o en la amenaza directa.

El rentismo lo llevamos en la cultura. Por esta razón, pocos caen en la cuenta de la limitación económica: atender estas "justas reivindicaciones" es algo que sólo puede hacerse ya a costa de otros —por la vía de los impuestos— o a costa de todos —por la de la inflación o el desatendimiento de servicios—. Nuestros recursos ahora son en verdad escasos, y el Estado se ve obligado a redistribuir producto, en vez de simplemente distribuir renta petrolera.

LA CUESTION ECONOMICA NACIONAL ES POLITICA

La cuestión histórica de Venezuela en este momento es, sin duda, cómo pasar de una estructura económica rentista a una productiva, capaz de competir en mercados abiertos. Por desgracia, las dificultades inmediatas derivadas del déficit fiscal, de la crisis bancaria o de la caída del PTB enturbian el planteamiento del problema, y parecen dejárnoslo en cómo pasar este periodo sin que se desencadene la violencia social a gran escala. Este es en verdad un objetivo inmediato, como también lo es posibilitar el crecimiento económico con el control del déficit y la reestructuración de la banca.

La cuestión nacional es sin embargo mucho más honda que sólo un asunto de crecimiento económico, o aun de buena distribución del producto acrecido. Todo ello podríamos tenerlo con sólo que Saddam Hussein hiciera una explosión atómica de prueba en su desierto, por ejemplo. Nuestro problema de fondo es cómo dejar atrás el horizonte rentista que hemos introyectado a lo largo de casi un siglo de petróleo. Tal cuestión no nos la resolverá Saddam.

En ese problema se trenzan íntimamente un hilo político y otro cultural. El político está en relación con el orden productivo del país. Diversas señales muestran un grado de desorden notable en la economía venezolana: La escasa cualificación técnica de los trabajadores; la concepción oligopólica, especulativa o rentista del empresariado; la bajísima productividad del sector público no petrolero; el entorpecimiento burocrático a la

producción privada; y la presencia de un enorme sector informal en la economía, entre otros. Algunos economistas llaman al grado de desorden económico «entropía», aludiendo con ello a que cuanto mayor sea ese desorden, más difícil es coordinar el trabajo eficientemente en una sociedad, y, por lo tanto, menor es el producto obtenido con el mismo esfuerzo. Un grado muy elevado de «entropía» lleva a la paralización productiva del país. Pues bien, en Venezuela este desorden, con los impedimentos que supone para la producción, sólo podía ser compensado a nivel de consumo apropiándonos de orden externo a través de la renta petrolera.

Pero ocurre que el orden económico no se compra, sino que se construye trabajosamente —podríamos decir se acumula— al interior de cada sociedad. Cuando hemos intentado comprarlo, el resultado ha sido mayor desorden económico interno, mayores dificultades ambientales para el éxito en términos de competitividad de cualquier iniciativa de producción.

La construcción de un orden productivo es un problema político, y no sólo económico en sentido estricto. Es político, en primer lugar, porque este cambio va a tener muchos perdedores: Tendrá perdedores reales como los sectores rentistas del funcionariado, el empresariado y la clase política. Y tendrá perdedores psicológicos abundantes en todos los que ponen todavía sus expectativas de prosperidad en la renta. Unos y otros no aceptarán con facilidad el diagnóstico respecto a un desorden económico que les beneficia, por lo que construir orden es algo que habrá de hacerse políticamente contra ellos.

Pero, en segundo lugar, esa construcción es un problema político también porque se refiere a la constitución más profunda de la sociedad: lo que se puede o no hacer, quién pone los límites y cómo, de qué puede esperar cada cual su prosperidad, etc. Se trata de un asunto de instituciones sociales —modos compartidos de hacer y valorar las cosas— que han de plasmarse en instituciones políticas: leyes adecuadas y un Estado resuelto a hacerlas cumplir en virtud de un mandato social. Asuntos como el papel del Estado en nuestra sociedad, los modos de decisión en materia pública, los espacios para la acción privada en economía, el lugar de las organizaciones civiles autónomas,

son partes constitutivas del orden económico de una sociedad, no sólo su «marco político». Puesto que con el rentismo viene caducando también la práctica populista, el problema de la reforma estructural de la economía venezolana se nos vuelve cuestión constitucional.

LA CUESTION ECONOMICA NACIONAL ES CULTURAL

Es indudable que muchas de nuestras instituciones sociales —desde la «libertad» respecto a los semáforos en rojo hasta el reivindicacionismo que ejemplificábamos al principio— no son adecuadas para el objetivo de la modernización del país en un contexto global de competencia. Este es nuestro problema cultural: dejado a sí mismo, el venezolano típico —sea trabajador formal, informal, empresario o funcionario— realiza espontáneamente numerosas acciones creadoras de desorden económico. Con ellas ocasiona graves dificultades a quienes quisieran actuar de manera más constructiva, porque con un soborno, un incumplimiento o una viveza se ganan ventajas puntuales importantes.

En una sociedad en que la mayoría de los ciudadanos actúan dentro de un cierto orden, hay mecanismos operativos de sanción para quienes lo violan, de tal manera que esas ventajas puntuales pronto resultan en desventajas. Cuando los mecanismos de sanción están afectados del mismo género de desorden que deberían corregir, compartido culturalmente por la mayoría, esto se vuelve imposible. Los guardianes del orden incrementan el desorden, y envían un mensaje equivocado a la sociedad acerca de cómo lograr la prosperidad. Las deficiencias en las instituciones políticas se refuerzan mutuamente con las deficiencias culturales de la población.

¿Por qué llamamos deficiente a nuestra cultura? Para entenderlo, aceptemos que los valores fundamentales que esperamos encontrar en la organización económica de una sociedad son los de productividad y solidaridad. Una sociedad con un nivel elevado de orden económico genera realidades portadoras de esos valores con su funcionamiento cotidiano, sin necesidad de «operativos». Eso puede hacerlo desde situaciones culturales, organizativas y políticas muy distintas:

pocas cosas asemejan al capitalismo de Estado sueco con el liberalismo americano o el corporativismo nipón. No hay «un modelo» de cultura o de organización económica exitosa que debamos imitar, sino que hay «un nivel» de orden económico que puede ser alcanzado, un nivel posible de productividad y solidaridad. Tal vez lo más interesante que podamos aprender de los modelos extranjeros es a no copiar modelos extranjeros, sino empeñarnos en el intento de crear desde nuestra misma entraña social un camino propio. No otra cosa hicieron Estados Unidos, Suecia o Japón.

Cuando criticamos la cultura venezolana al respecto, estamos criticando una realidad histórica —no algo que llevemos en la sangre— y que por tanto puede ser cambiada por nosotros de la misma manera que fue creada por nosotros. Nuestra crítica consiste en constatar que disminuimos en productividad y solidaridad, por razón de nuestras mismas acciones. Sabemos que en un mundo competitivo, para protegernos del cual no contamos ya con la renta, nuestra cultura económica no basta para dar respuesta. Por el contrario, si persistimos en ella disminuirán nuestro consumo y nuestra inversión, y junto con ellos perderemos más aceleradamente productividad y solidaridad. La sociedad venezolana se desordenará aún más. Los once años transcurridos desde el Viernes Negro de 1983 avalan este pronóstico. Más que calificarla de «mala en sí», nuestra cultura económica es deficiente por su inadecuación a las circunstancias, por su incapacidad para generar un nivel elevado de orden económico en la situación actual del país y el mundo.

Para entender mejor el problema, con vendrá discutir acerca de los significados de «productividad» y «solidaridad» para nosotros.

EL SIGNIFICADO DE LA PRODUCTIVIDAD

Un ciudadano del Primer Mundo no necesariamente aplica más trabajo que un venezolano promedio, pero su trabajo es mucho más productivo, más eficiente en la transformación de la naturaleza. Se apoya en una acumulación social de capital físico, organizacional y humano que eleva su rendimiento. El acento ha de

ponerse en los aspectos organizacionales de la empresa y la sociedad, y en la cualificación del recurso humano más que en la posesión de capital físico —instalaciones, máquinas, infraestructura, etc—. Este último es precisamente el que pudimos comprar con petróleo, pero también es aquel cuya falta no fue decisiva para muchos países de Europa y Asia tras la devastadora Segunda Guerra Mundial.

Elevar la productividad en Venezuela significará aumentar la aplicación real de trabajo e incrementar el capital físico, pero, sobre todo y más primariamente, acrecentar el capital humano y organizacional de nuestra sociedad. Este capital se desglosa en varios acápites: capacidad de apropiación por parte de los trabajadores de tecnologías cada vez más flexibles; interiorización de métodos productivos cambiantes; comprensión difundida de los mecanismos básicos del mercado; estructuración de los mercados internos que imposibilite posiciones de fuerza oligopólicas o monopólicas; organización de base laboral, empresarial y de consumidores para el reparto del producto y el control de la responsabilidad social de los agentes económicos; un sistema de reglas estable e igual para todos que cierre caminos de enriquecimiento no productivo; políticas estatales que estimulen la competitividad, etc.

Como es fácil ver, las condiciones de posibilidad para que Venezuela eleve su productividad son ellas mismas productos sociales. El capital humano y el organizacional, como el físico, se acumulan y se reproducen. Nadie puede dárseles a nuestra sociedad desde afuera, y por eso dijimos arriba que se trata de algo más que una cuestión de crecimiento económico —susceptible con renta—.

EL SIGNIFICADO DE LA SOLIDARIDAD

La lista de elementos de la productividad que reseñamos arriba, más los que podrían añadirse, muestra de inmediato la base de solidaridad social sobre la que se edifican la competitividad del país e incluso la posibilidad de competencia real adentro de nuestra economía. Sin educación de calidad —y condiciones alimenticias y ambientales concomitantes para los niños— no habrá capacitación de los trabajadores; sin compenetración entre

trabajadores y patronos no mejoraremos nuestros métodos de producción; sin difusión del saber y la información económicas no tendremos la abundancia precisa de iniciativas empresariales exitosas; sin instituciones sociales de solidaridad no podremos sostener reglas iguales para todos; sin asociaciones de base no habrá control de las acciones antiproductivas y de las posiciones de fuerza; sin reparto adecuado del producto faltará el estímulo a los trabajadores o a los empresarios; sin un Estado que cuide del bien universal de la sociedad seguirá siendo más fácil prosperar sin producir que haciéndolo.

La solidaridad no es pues un requisito moral añadido piadosamente al proyecto económico de elevar la productividad, o sólo un valor producto de un elevado nivel de orden, sino también una condición fundamental suya de posibilidad. Es un valor producto y productor de orden. Y, en efecto, nuestro desorden consiste en insolidaridad. Lo que significa que tendremos que producirla socialmente, puesto que no está ya ahí: habrá de ser parte indispensable de nuestro capital como nación.

A este propósito, es preciso reflexionar un poco más sobre el papel del Estado, que ha sido por muchas décadas el provisor fundamental de solidaridad en nuestra sociedad. La renta petrolera, en la que se fundaba ese papel provisor, descargó a la sociedad de la tarea de crear solidaridad, por lo que nuestro capital cultural de solidaridad ha disminuido violentamente en los últimos veinte años. Ahora sentimos las consecuencias en cada acción económica que intentamos, como trabajadores, empresarios o consumidores. El costo de cada producto resulta más alto, la iniciativa económica más penosa, la remuneración del trabajo menor que hace veinte años, con unos niveles de renta semejantes y un capital físico y humano indudablemente mayores. El clima social para la acción económica se ha enrarecido, y no es difícil encontrar causas concretas en la dejación del rol de creación de solidaridad real que la sociedad ha hecho a favor del Estado.

Lógicamente, cuando se plantea que el Estado abandone lo que aún puede cumplir de ese rol con la renta restante, el rechazo de la población es inmediato. Funcionan los mecanismos psicológicos del rentismo, pero también el temor bien fun-

dado a vivir siendo débil en una sociedad en la que nadie crea solidaridad y unos pocos sostienen inexpugnables posiciones de fuerza. El rechazo al neoliberalismo posee bases sólidas, no se funda sólo en un malentendido vicioso.

El cambio de rol del Estado, y sus sostenedores, los partidos y sindicatos populistas, tal vez sea la clave de cualquier proyecto de transformación de la economía nacional. De una parte, deben dejar de pretender sustituir a la solidaridad social, y dejar brotar en paz a las instituciones sociales de solidaridad que acabarán reconstituyendo las instituciones políticas del país. De otra parte, el Estado no debe retirarse bajo ningún concepto de algunas funciones de solidaridad fundamentales, entre las cuales mencionaremos sólo tres: hacer cumplir de manera universal la ley contra las tendencias anómicas, impedir el abuso de posiciones económicas de fuerza, y asegurar —que no es lo mismo que proveer— *las oportunidades mínimas a todos para una participación exitosa como productores en los mercados*, de la que puedan derivar su participación como consumidores. Esta última función marca una diferencia radical tanto con el esquema rentista —que provee directamente posibilidades de consumo— como con el neoliberal —que deja a la suerte de cada cual sus oportunidades de participación productiva—.

Ahora bien, como señalamos, la solidaridad no es sólo una condición de la productividad, sino un producto valioso en sí mismo de un nivel alto de orden económico. Lo es porque realiza el reconocimiento de la dignidad personal de todos los participantes en una sociedad. Está vinculada con realidades antropológicas tan importantes como la socialidad, la justicia, o el amor, que son mucho más que sentimientos o emociones. Y además, esto es importante, conecta directamente con valoraciones arraigadas en el *ethos* de nuestro pueblo, aunque no estén estructuralmente realizadas en nuestra sociedad ni aun en nuestra vida personal cotidiana. Pocos dudarán de que nos convenga crecer en solidaridad: una transformación de nuestra economía que lo intente será vista como buena y más fácilmente aceptada por la población. La solidaridad puede dar la batalla simbólica en nuestra cultura contra el rentismo como tal vez no pueden hacerlo la competitividad o la productividad.

Para discutir el proyecto económico nacional (y II)

Raúl González Fabre

- **La tarea del liderazgo político consiste en emplear el agotamiento de un esquema para construir otro nuevo.**
- **El desvanecimiento de la ilusión electoral puede constituir una base de transformación cultural válida.**
- **En una transformación cultural el discurso ético tiene un papel decisivo: abrir caminos transitables cuando se derrumba un modo de vida.**
- **La transformación hacia un orden productivo y solidario es el paradigma de evaluación para propuestas de política económica.**
- **La tentación consiste en buscar los recursos para que "este" orden siga funcionando sin cambiar de raíz.**
- **Discutir el proyecto económico nacional requiere comprender la cultura económica de los venezolanos.**

Tras haber propuesto los objetivos de productividad y solidaridad comprometidos en la transformación económica del país, esta segunda y última entrega pretende apuntar al equilibrio político necesario para esa transformación y al lugar del discurso ético en ella. Extrae finalmente un criterio para la discusión sobre políticas económicas concretas.

EL DIFÍCIL EQUILIBRIO POLÍTICO DE LA TRANSFORMACION

Ningún proyecto de transformación económica será tal por la sola enunciación de sus objetivos, sin un programa de aplicación en esta sociedad concreta. Sabemos que el Estado venezolano no se encuentra en capacidad de llevar adelante sus responsabilidades en materia de solidaridad y productividad, en buena parte porque nuestro pueblo conserva su cultura rentista fundamental y porque las organizaciones de base social, que podrían "forzar" al Estado, no poseen la fuerza precisa. Pero aunque no sea capaz, no por eso el Estado queda descargado de sus responsabilidades. La tarea difícil del liderazgo político consiste en emplear el agotamiento de un esquema para construir otro nuevo, sin poder hacer pie ni en el esquema agotado ni en el todavía inexistente, o más bien haciendo pie en ambos a la vez. Un equilibrio difícil, porque supone construir aprovechando bases muy frágiles.

Las dos últimas elecciones presidenciales demostraron que no se llega al control del Estado —y por tanto, a la oportunidad de transformar desde el Ejecutivo— sin dejar un sobreentendido populista más o menos explícito en la campaña, algo que

los electores puedan interpretar como una vuelta al pasado. Una vez en el poder, el agotamiento de la renta impide desarrollar una política populista responsablemente, de manera que se vuelve preciso desvanecer una ilusión. Ese desvanecimiento, si se hace bien y no de manera que sea percibida como prepotente, insincera o deshonesto, puede constituir una base de transformación cultural válida, pese a su carácter negativo. Así, seguramente en las siguientes elecciones será necesario menos populismo para ganar.

Por otra parte, una política inteligente y gradual puede potenciar la capacidad de algunas zonas del Estado para regenerarse, emplear los organismos menos deteriorados para controlar a los más deteriorados, crear algunas instituciones políticas nuevas, y aprovechar la fuerza de la base social existente a favor de transformaciones para presionar al aparato estatal.

Finalmente, el descontento difuso de la población con los grandes beneficiarios de la renta petrolera, puede ser utilizado para colocar al empresariado en su lugar y cerrarle vías de enriquecimiento a costa del Estado, de posiciones oligopólicas, o de operaciones especulativas.

En todo caso, quizás lo fundamental del intento de promover transformaciones desde el Ejecutivo sea comprender que no puede confiarse mucho en nadie, ni buscar en un solo actor —el empresariado, el funcionariado o la población trabajadora y consumidora— el apoyo necesario, porque en todos funcionarán antes o después reflejos rentistas. Si se concede a alguno demasiada preponderancia, tenderá a reproducir el rentismo a costa de los demás. No tenemos aún "el sujeto" de esta transformación, por lo que mientras va apareciendo, es preciso hacer equilibrios y arar con los bueyes disponibles.

EL LUGAR DEL DISCURSO MORAL

La sensación de crisis histórica está produciendo una inflación de admoniciones morales en nuestra sociedad, como puede notarse por el contenido y hasta el tono de cualquier programa de opinión. Este discurso consiste por lo general en emplear preceptos de una moral universal para exigir comportamientos determinados a otros, o bien para concluir gene-

realizaciones del tipo "lo que tendríamos que hacer todos...", o "por eso es que el país está como está". En la amplia medida en que quienes usan esos discursos de ética universal no se miden por sus mismos preceptos, sino que actúan como todos de manera particularista, sencillamente reproducen la esquizofrenia moral de nuestra cultura. Hacen moralismo, en vez de reclamos o educación ética, como pretenden, y sirven para acentuar la crisis. Salir de ella requerirá que crezca el reconocimiento social de la conexión entre discursos y hechos, y así se recomponga el panorama deteriorado de la autoridad moral en nuestra sociedad, siempre fundamental para guiar la toma de decisiones.

Otro caso distinto es el del discurso de quienes están honestamente empeñados en transformaciones de raíz. Sobre el fondo ruidoso de los que emplean la moral de manera utilitaria, no es fácil distinguirlos, aunque tal vez se caractericen por abrir nuevos imaginarios sociales más que por agredir. Tampoco es fácil valorar la efectividad de sus palabras, aunque podemos presumirla pequeña.

Sin embargo, en una transformación cultural el discurso ético tiene un papel decisivo. Los cambios precisos en las instituciones sociales para pasar a una cultura productiva no ocurrirán por el discurso moral, pero tampoco sin él. Es decir, nuestra cultura rentista se irá derrumbando por inviabilidad económica más que por convencimiento, pero una vez derrumbada en la vida de una persona, que aparezcan rasgos constructivos en una dirección distinta depende mucho de la existencia de un imaginario ético que marque como transitable un camino bueno. Como la anomia y la destrucción de la solidaridad social restante es todavía el rumbo de mayor apariencia de éxito para muchas personas, el discurso moral resulta imprescindible para ofrecer una alternativa simbólica en términos de productividad y solidaridad. Puede facilitar la reinterpretación constructiva de la propia situación, que ayude a la persona a cerrarse a sí misma el camino de la anomia y a buscar oportunidades productivas, una vez deshecha la ilusión rentista. Encontramos aquí la dimensión ética, repito *imprescindible*, de cualquier proyecto de transformación económica cuando el mal es cultural.

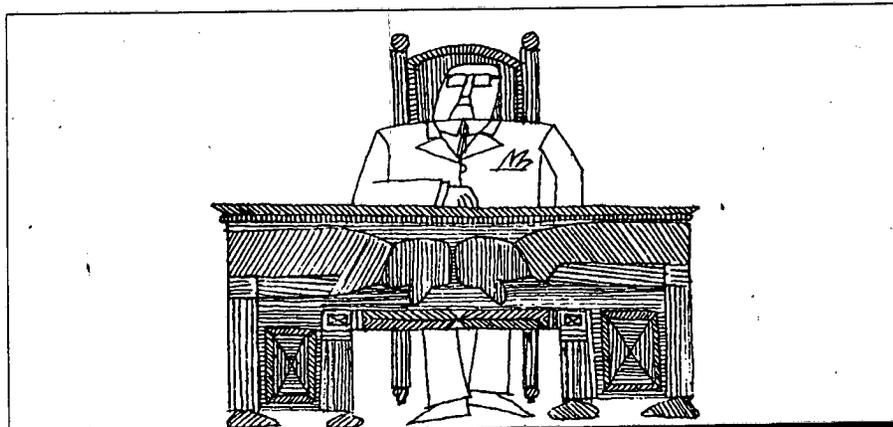
LA TRANSFORMACION ECONOMICA COMO PARADIGMA DE VALORACION

Tras haber tratado de dibujar algunos elementos fundamentales de los objetivos y las vías de la gran transformación económica precisa en nuestra sociedad, debemos ahora volver a las políticas económicas concretas, para señalar un criterio de discernimiento: *A la hora de valorar una determinada propuesta de política económica a cualquier plazo, es preciso analizar detalladamente su impacto económico, político y cultural sobre la transformación del país hacia un orden productivo y solidario.* Lógicamente, las formas en que puede ocurrir ese impacto son múltiples y con frecuencia contradictorias: a un nivel puede avanzarse y a otros retrocederse con la misma acción. Nada reemplazará a la prudencia política a la hora de decidir.

El criterio mencionado arriba es algo menos irrelevante de lo que parece por su generalidad. En primer lugar, pretende negar que el problema de la transformación de la economía nacional sea un exclusivo asunto de economistas en el sentido académico de la palabra. Estas personas, especialmente calificadas para relacionar fenómenos monetariamente cuantificables, tienen mayores dificultades para comprender los fundamentos del orden social, los equilibrios políticos, las dimensiones culturales y sus dinanismos éticos. Y, como hemos querido mostrar, todos esos aspectos resultan fundamentales cuando ya no se trata de conducir la economía en la rutina de un modelo operativo, sino de reconstituir una sociedad en crisis de modelo.

En segundo lugar, el criterio intenta poner las bases de una discusión posible acerca del orden económico que puede resultar más adecuado para el país. Como carecemos de un gran diseño, y nuestros ideólogos económicos a lo más que llegan es a proponernos modelos exitosos en países de cultura no rentista y no caribeña, presentimos que la discusión sobre modelos será estéril y farragosa. Por ello pensamos que puede resultar más adecuado llevar a cabo la discusión sobre políticas concretas, siempre que se haga con visión de totalidad social. Lógicamente, no se trata de obtener consensos imposibles para actuar, sino de enriquecer la discusión económica hasta el grado de realismo y de racionalidad precisos en este momento.

Además, el criterio quiere centrar el objetivo estructural de un proyecto económico nacional, que no es cómo obtener el dinero preciso para que "esta" organización económica siga funcionando, sino cómo cambiar progresivamente a "otra" organización económica, de un nivel de orden competitivo en los mercados internacionales. Dicho con otras palabras, es preciso anticiparse al futuro y evitar la tentación de hacer sólo lo mínimo para escapar de las inviabilidades de hoy. Esta tentación es fuerte, porque coincide con el reclamo de la población: salir del atolladero para sostener tanto rentismo como sea posible. Si se cae en ella, nos arriesgaremos a una crisis económica perpetua, a que nuestra economía se mueva sólo reactivamente a las circunstancias adversas, sin capacidad de liderazgo en los mercados internacionales y sobre todo, sin atreverse a construir las bases culturales de un nivel de orden económico más



El problema de la transformación de la economía nacional no es un exclusivo asunto de economistas en el sentido académico de la palabra

elevado.

Por último, el criterio propuesto apunta a una discusión acerca de las condiciones reales de este pueblo para la productividad y la solidaridad. Por desgracia, carecemos de estudios suficientes acerca de la cultura económica de los venezolanos y de las repercusiones en el orden económico de su cultura política, de tal manera que nuestros economistas se ven obliga-

dos a emplear las conclusiones microeconómicas de estudios realizados en USA o Europa. Detrás late el supuesto ilustrado de que la racionalidad económica es una sola, sin matices. Así, cuando la nuestra no se ajusta a ella, tiende a ocurrírseles plantear un *tour de force* —como el de Miguel Rodríguez—, para obligar a la gente a actuar según los libros, y transformar nuestra economía hacia modelos exitosos

en países de condiciones culturales muy distintas. No será raro que pierdan ese *tour de force*, dejando la situación peor que estaba. Una discusión en torno a los rasgos culturales de los venezolanos —que además son tan heterogéneas como el país mismo— puede ayudar a descubrir y realzar un orden económico propio, integrador de toda la población y no sólo de quienes sean capaces de actuar como norte-

Notas sobre el Plan Corrales*

La factura bancaria

Desde el punto de vista de los criterios generales especificados en el presente artículo, la solución propuesta en el PERE para pagar la crisis bancaria es, sin duda, adecuada. Emplea la renta petrolera para evitar el deterioro de las condiciones en que debe desenvolverse la actividad productiva, y para evitar un reparto más regresivo de la carga de la crisis, vía inflación. Si las participaciones en la regalía denominadas en dólares se venden directamente al público desde denominaciones bajas, aumentará el número de personas con una opción de colocación de recursos al margen del sistema bancario nacional, y con ello disminuirá el poder de éste sobre los ahorristas. El poder de juego monetario del Estado se vería asimismo comprometido, puesto que defraudar a los tenedores de estos bonos no podría hacerse más que a costa de una pérdida enorme de credibilidad.

La renta se acaba de verdad

En todo caso, la hipoteca sobre renta petrolera futura que esta emisión de deuda en dólares supone, plantea de manera concluyente la necesidad de reestructurar la economía nacional hacia mayor productividad. Comprometer una parte de la renta —adicional a la ya comprometida por las deudas externa e interna existentes— significa que tenemos menos tiempo y menos juego político para realizar esa reestructuración.

¿La batalla empieza ya?

El Programa de Estabilización aborda el problema estructural del déficit fiscal a través de políticas de contención del gasto público, y de incremento de la recaudación tributaria interna, aunque cuenta también con el incremento del ingreso fiscal petrolero.

La contención del gasto fiscal —particularmente de los salarios del funcionariado— nos conduce directamente a la primera batalla de una guerra que será larga, por la modernización de la Administración Pública. El triunfo en esa guerra lo tendremos sólo cuando haya una buena correlación entre la producción del sector público y su costo para el país, es decir, cuando el sector público deje él mismo de ser rentista.

Por desgracia, el Programa prevé a corto plazo poca cosa más que deslazar al Estado de algunas empresas públicas —vía privatización—, y mejorar los mecanismos de recaudación, información y control para las finanzas del Estado. El reagrupamiento de ministerios o la descentralización lenta de algunas funciones, no da respuesta satisfactoria al problema de cómo aumentar la productividad del sector público. Puesto que esta productividad es en general muy baja, los salarios reales de los empleados públicos se corregirán a la baja, con-

teniéndolos en el nivel de la inflación prevista, sin referencia a la pasada.

Menor productividad y menor solidaridad

Con ello sin duda se disminuye la medida en que el funcionariado vive de la sociedad, pero se contradice el objetivo de que produzca más para ella. Normalmente ocurrirá lo contrario: veremos disminuir su productividad, por falta de un programa concreto de gerencia pública que podría servir para atenuar el efecto que el malestar salarial va a generar en el funcionamiento de la Administración. El Estado se deteriorará aún más salvo, esperemos, en los organismos fiscales de nueva planta que van a crearse con financiación suficiente.

Podríamos pensar: "que produzca menos, pero que gaste menos". Sin embargo, no conviene olvidar que el Estado es el principal productor de solidaridad —y por tanto, de orden— en nuestra sociedad. Si baja su productividad, tendremos más desorden y menos solidaridad. Todos lo resentiremos, pero las víctimas preferenciales serán los pobres, que carecen de los recursos para crear órdenes privados en torno a sí. Y lógicamente, el daño que sufran los más pobres refluirá sobre el conjunto del sistema económico como inestabilidad y baja productividad también del sector privado.

Conviene decir de una vez que ni la apelación del gobierno a la solidaridad privada —por ejemplo, a través del programa "Mi compromiso con Venezuela"— ni la "acción social" del SAS, el ministerio de la Familia, etc. son la clave de lo que el Estado debe aportar a la reconstrucción de la solidaridad social precisa para elevar nuestro nivel de orden económico. Pueden estar bien, pero no bastan, ni siquiera significan mayor cosa que un paño caliente que pronto se enfriará si el conjunto del aparato del Estado no es capaz de producir cada vez más solidaridad con sus funciones ordinarias. En este sentido, el último capítulo del Plan Corrales da lástima.

¿Dónde está la reforma de la Administración?

Un programa a fondo de reforma del sector público parece la clave de la acción estatal para el paso de una Venezuela rentista a una productiva que se propone el PERE en su subtítulo. Esta reforma no puede descansar solamente sobre los hombros de los trabajadores —que sin duda habrán de trabajar más y despilfarrar menos tiempo y recursos ajenos—, sino que principalmente ha de hacerlo sobre la gerencia pública. Ella tiene deberes importantes con sus funcionarios. Por ejemplo, el de fumigar el sector de "becados" que cobran sin producir, limitar estructuralmente las posibilidades de corrupción y, sobre todo, ordenar el trabajo de los funcionarios para incrementar su productividad. De esa manera se rescataría ante la población la imagen del servidor público, y se pondrían las bases económicas para un incremento de la remuneración real del funcionariado. Productividad se engazaría entonces claramente con solidaridad.

Obviamente, un programa de reforma a fondo de la Admi-

americanos, como suecos o como coreanos.

Esto es algo distinto a las concesiones al rentismo que hayan de hacerse dentro de una estrategia de tránsito hacia otra estructura económica. Dentro de su inadecuación general, sería necio demonizar nuestra cultura económica en vez de buscar en ella los elementos —por muy “heterodoxos” que sean— que pue-

dan formar parte de un orden económico de alta productividad y solidaridad. Más exactamente, sería tan antieconómico como destruir un capital que ya tenemos por no saber qué hacer con él. Quienes se proponen el cambio estructural a fondo de la economía ayudarán poco si se sienten a sí mismos como iluminados —o ilustrados— con una misión de guía sobre un pueblo de salvajes económicos. Más bien

la suya es una tarea pedagógica: acompañar a este pueblo para que encuentre lo mejor de sí mismo, y construya un orden productivo y solidario a partir de ello. En esta discusión pedagógica los economistas tienen mucho que ofrecer, pero también que aprender en orden a comprender mejor su país, hacer más realista su ciencia y más racional su racionalidad.

nistración no puede desarrollarse en el corto plazo que considera el PERE. Sin embargo, si vamos a avanzar algo en este periodo al respecto, hay que formularlo ya. De lo contrario, en 1999 tendremos un Estado aún peor que el actual. La falta incluso de una promesa acerca de ese programa de reforma es el principal pecado del PERE.

Este pecado puede ser mortal tanto política como económicamente para el plan Corrales.

Amenazado por el flanco político

Políticamente, su pecado de omisión puede condenar al PERE porque se va a incrementar la tributación interna real —del orden del 150% en los impuestos sobre la renta y las ventas, mucho más en la gasolina— sin que haya reales perspectivas de mejora de los servicios que ofrece el Estado. La población está dispuesta, a nuestro entender, a aceptar los aumentos inmediatos dentro de un marco de cambios a largo plazo que empiecen a verse ya, aunque sea de manera simbólica. En este sentido, la modernización tributaria del Estado cuenta inicialmente con un apoyo importante, tanto más cuanto que significa por fin empezar a apoyarnos más en la tributación interna que en el ingreso petrolero.

Pero ese apoyo no es incondicionado: requiere que el Estado haga algunos gestos de cambio profundo, para poder empezar a creer en él, en su capacidad para desempeñar roles como los que el PERE le atribuye —orientador estratégico de la economía, armonizador de intereses, administrador eficiente, coordinador de la solidaridad social—. Por el contrario, el gobierno nos pide que creamos en *una persona*, mientras cada contacto con el aparato estatal en búsqueda de servicios o pretendiendo cumplir con requisitos legales, desmiente los discursos del Presidente.

Combinada esta situación respecto a la fe popular con el incremento de la carga impositiva y el malestar salarial de los funcionarios, tenemos un coctel explosivo políticamente, un terreno abonado para la demagogia de todo color, que milagro sería si la habilidad de Caldera sabe torear a la larga. La gente espera algo más en cambios que los que personalmente puedan hacer el Presidente o sus ministros, espera signos eficaces de incremento estructural de la capacidad productiva del Estado.

Amenazado por el flanco económico

Económicamente el pecado del PERE también puede ser mortal. La segunda parte del Programa es una suerte de anticipo del próximo Plan de la Nación. Leído en este contexto, pronto se descubre que el gobierno confía en que el crecimiento económico ocurra a tiempo para que la habilidad política del Presidente permita salvar el bache. Los cambios estructurales en el Estado —salvo los fiscales y los financieros— pueden ser así pospuestos indefinidamente, o realizados con lentitud, porque la recuperación del empleo y la producción ocurrirán antes de que se agote la fe popular. Al ver correr la

plata, todos nos olvidaremos de las honduras de la crisis.

Para ello se propone una acción inmediata del Estado en apoyo de sectores como la pequeña y mediana empresa, la agricultura y ganadería o la construcción. Y junto con esto, la apertura al capital extranjero en el medio plazo de los sectores básicos de exportación: energía, minería, industrias metálicas, forestal y turismo.

En el primer grupo de acciones vemos aparecer mecanismos de protección, control de precios e iniciativa estatal que este Estado ha sido incapaz de aplicar eficientemente en circunstancias bastante más favorables que las actuales. No encontramos ninguna razón para pensar que ahora vayan a resultar mejor que en los veinte años pasados. De la misma manera, parece problemática la perspectiva de que la Administración apoye eficazmente la modernización del sector privado, cuando ella misma está tan lejos de ser moderna. Por el contrario, más normal será que funcionen los reflejos de siempre en el funcionariado que controla, otorga créditos o contratos, distribuye información, etc.

Las mismas restricciones pueden pensarse para los programas de apertura a medio plazo: en algunos sectores, como el petrolero, sólo faltan condiciones legales para ofrecer buenos negocios a los inversionistas extranjeros; pero en muchos otros el proceso no es tan fácil, porque las empresas públicas comprometidas se encuentran internamente deterioradas, sometidas a fuertes presiones políticas, etc. Eso por no hablar de la transformación cultural que la población precisa para el éxito turístico en la competencia caribeña; en este punto concreto el optimismo del gobierno es muy difícil de sustentar: se basa sencillamente en ignorar las dificultades.

El detallito que falta

En síntesis, el anticipo del Plan de la Nación contenido en el PERE tiene la virtud de plantear un crecimiento diversificado de la economía a partir de nuestras potencialidades naturales, procurando el enganche del resto del aparato productivo a los sectores más competitivos. Por esta vía se extendería la participación social en la producción y en el producto, en vez de hacerlo principalmente a través del Estado. Este es sin duda un buen propósito. La dificultad puede exponerse así: el Programa confía un rol decisivo en el estímulo de ese crecimiento a un Estado *distinto al realmente existente*, y no contempla ningún plan para que el Estado se vaya transformando de tal manera que en cada momento esté a la altura de lo que se le va a pedir. En el PERE, otra vez se nos olvida que nuestro problema económico nacional es primero de orden, no de recursos financieros.

R.G.F.

Para una exposición sintética de la propuesta del Plan, véase el artículo de Osmel Manzano «Las premisas del PERE», en el pasado número de SIC (nº 568, p. 354).